



FOTO: Guajiragráfica

# LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA GUAJIRA: CAPTURADA POR CONTRATISTAS Y PRESTAMISTAS

La Guajira, una región con un inmenso potencial para el desarrollo, enfrenta una crisis de gobernabilidad que ha frenado su progreso durante décadas. Detrás de este estancamiento se encuentra un entramado de poder e influencia donde los contratistas y financiadores de campañas políticas han capturado la administración pública, distorsionando sus objetivos y desviando recursos que deberían mejorar la calidad de vida de la población.

Desde hace años, La Guajira ha sido testigo de cómo contratistas y prestamistas han tomado el control de las decisiones públicas. Estos actores, que inicialmente comenzaban como proveedores de servicios o financistas de campañas políticas, han escalado hasta convertirse en dueños del poder, dictando qué proyectos se ejecutan y a quién se otorgan los contratos más lucrativos (Díaz, 2019). Este fenómeno ha erosionado la independencia del sector público, convirtiendo

a los entes estatales en marionetas que actúan según los intereses de quienes financian las campañas políticas. La dependencia de los recursos provenientes de estos financiadores ha permitido que adquieran una influencia desmesurada, que además se traduce en la manipulación y captura de las instituciones públicas (Gómez & Rodríguez, 2020).

La gobernabilidad en La Guajira se encuentra seriamente comprometida. Las decisiones que deberían estar guiadas por el interés público, tales como la asignación de recursos y la priorización de proyectos, están siendo dictadas por actores externos cuya única preocupación es recuperar y multiplicar sus inversiones (López, 2021). El deterioro de la gobernabilidad se manifiesta en la falta de coherencia en las políticas públicas, la ejecución deficiente de proyectos y la incapacidad de las administraciones locales para responder a las necesidades más urgentes de la población.



FOTO: Freepok

Las instituciones han perdido su autonomía, y con ella, su capacidad para implementar un plan de desarrollo que responda a las verdaderas prioridades de la región (Pérez, 2022). Este fenómeno también contribuye a la desconfianza generalizada en las instituciones. Los ciudadanos perciben que los gobiernos locales y departamentales no son más que extensiones de los intereses de contratistas y financiadores, lo que socava la legitimidad del sistema político y fomenta un clima de apatía y descontento (Torres, 2023). Además, la falta de transparencia y rendición de cuentas agrava esta situación, ya que los procesos de contratación y ejecución de obras se manejan a puertas cerradas, alejados del escrutinio público (Ramírez, 2023).

El círculo vicioso de la financiación política es el núcleo del problema. Los contratistas y prestamistas financian campañas políticas con la expectativa de recibir contratos y beneficios una vez que sus candidatos ganan las elecciones. Este esquema crea un compromiso implícito entre los políticos y sus patrocinadores, lo que distorsiona la función pública desde el primer momento. El político que accede al cargo no lo hace con el objetivo de servir al pueblo, sino de devolver favores a quienes lo llevaron al poder (Fernández, 2020). Por consiguiente, este ciclo perpetúa la corrupción y la ineficiencia en la administración pública. Los proyectos se adjudican no por su viabilidad o necesidad, sino por la lealtad política de los contratistas, lo que resulta en obras mal planeadas, con sobrecostos y de baja calidad (García & López, 2022). La falta de controles y sanciones efectivas refuerza este ciclo, permitiendo que los mismos actores continúen ejerciendo su influencia elección tras

elección. Mientras tanto, los políticos que intentan operar fuera de este esquema enfrentan grandes obstáculos para acceder y mantenerse en el poder, creando un entorno donde la corrupción y la dependencia de los financiadores se convierten en la norma (Hernández, 2023).

Las consecuencias de esta dinámica son devastadoras para la población de La Guajira. La captura de la administración pública por intereses privados resulta en una distribución desigual e injusta de los recursos. Los fondos que deberían destinarse a mejorar la calidad de vida de la población terminan siendo desviados hacia proyectos que benefician a una minoría, mientras que las comunidades más vulnerables continúan enfrentando carencias en áreas críticas como la salud, la educación, el acceso a agua potable y la infraestructura básica (Rivera & Sánchez, 2021). Esta situación perpetúa un ciclo de pobreza y desigualdad que afecta especialmente a los grupos más vulnerables, como las comunidades indígenas y rurales. La falta de inversión en servicios esenciales condena a amplios sectores de la población a vivir en condiciones de extrema precariedad, sin oportunidades reales de mejorar su situación (Mendoza, 2022). La corrupción y la falta de transparencia generan un clima de desconfianza y desesperanza. Los ciudadanos sienten que sus voces no son escuchadas y que el sistema está diseñado para favorecer a unos pocos a costa del bienestar de la mayoría. Este sentimiento de exclusión no solo desmoraliza a la población, sino que también erosiona el tejido social, fomentando la apatía y la resignación (Jiménez, 2023).



FOTO: Freepok

Frente a este panorama desolador, es crucial un llamado a la acción para revertir la situación en La Guajira. Es imperativo que la sociedad civil, las organizaciones sociales y los líderes comunitarios se movilicen para exigir mayor transparencia, rendición de cuentas y una administración pública verdaderamente comprometida con el bienestar común (Gómez & Rodríguez, 2020). Uno de los primeros pasos necesarios es la implementación de mecanismos más estrictos de control y vigilancia sobre los procesos de contratación pública. Esto incluye la creación de comités de vigilancia ciudadana que puedan supervisar la adjudicación y ejecución de contratos, así como el fortalecimiento de las entidades de control para que puedan actuar de manera efectiva contra la corrupción (Ramírez, 2023). Es esencial fo-

mentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones. La comunidad debe tener un papel activo en la definición de las prioridades de desarrollo y en la supervisión de la gestión pública. Esto no solo contribuirá a una mayor transparencia, sino que también permitirá que los proyectos se orienten verdaderamente hacia las necesidades de la población (López, 2021). Por último, es vital promover una cultura de integridad y ética en la administración pública. Esto implica no solo sancionar la corrupción, sino también reconocer y apoyar a los funcionarios y líderes políticos que actúan con transparencia y compromiso social. Crear incentivos positivos para la buena gestión pública es una estrategia clave para transformar la cultura política de la región (Pérez, 2022).

La captura de la administración pública por contratistas y prestamistas en La Guajira es un problema profundo que requiere una intervención decidida y coordinada para ser superado. La gobernabilidad se ha visto gravemente afectada, perpetuando un ciclo de corrupción, ineficiencia y desigualdad que mantiene a la región en un estado de subdesarrollo (Torres, 2023). Para superar esta situación, es necesario romper el círculo vicioso de la financiación política (avanzar hacia la financiación pública de las campañas), instaurar mecanismos de control más eficaces, y fomentar una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Además, es crucial promover una cultura de integridad en el servicio público, que priorice el bienestar de la población sobre los intereses privados (Hernández, 2023). La Guajira tiene un enorme potencial para el desarrollo, pero este solo podrá materializarse si se logra restablecer la confianza en las instituciones y se garantiza que los recursos públicos se utilicen en beneficio de todos. Este cambio no será fácil ni rápido, pero es posible con el compromiso y la acción colectiva de todos los sectores de la sociedad (Mendoza, 2022).

## Referencias

- Díaz, M. (2019). Corrupción y clientelismo en la administración pública de La Guajira. Editorial del Norte.
- Fernández, L. (2020). Financiación política y su impacto en la gestión pública en Colombia. Universidad Nacional.
- García, R., & López, J. (2022). Contratismo en La Guajira: Análisis de las políticas de contratación pública. Revista de Estudios Regionales.
- Gómez, A., & Rodríguez, P. (2020). La captura del Estado: El caso de La Guajira. Fondo Editorial Universitario.
- Hernández, E. (2023). Gobernabilidad y corrupción en La Guajira: Un análisis desde la perspectiva política. Universidad del Atlántico.
- Jiménez, S. (2023). Desconfianza y desesperanza: Consecuencias de la corrupción en La Guajira. Observatorio de Desarrollo Social.
- López, V. (2021). Transparencia y participación ciudadana en la gestión pública: Retos y oportunidades. Editorial Andes.
- Mendoza, F. (2022). Pobreza y desigualdad en La Guajira: Impacto de la corrupción en



**ARCESIO  
ROMERO  
PÉREZ**

X arcesior

@ arcesiorommertz